



JUICIO ELECTORAL

Expediente: TECDMX-JEL-285/2025

Parte Actora: Dionisio Félix González Chávez

Autoridad Responsable: Dirección Distrital 28 del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Magistrada Ponente: Laura Patricia Jiménez Castillo

Secretaria: Ana Paula Ascobereta Vázquez¹

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.

Sentencia que, con motivo de la demanda presentada por Dionisio Félix González Chávez², **confirma** la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2025 en la Unidad Territorial Culhuacán (Pblo)³, Iztapalapa, en la que resultó ganador el proyecto “Pozo de retención de agua pluvial en la calle E. Esq. Con AV. Tláhuac”⁴.

I. ANTECEDENTES

1. **1. Convocatoria.** El 15 de enero de 2025⁵, el Instituto Electoral de la Ciudad de México⁶ aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía, originarias, habitantes y vecinas de la Ciudad de México, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitarias (COPACO), así como a las Organizaciones Ciudadanas y de la Sociedad Civil a participar en la Consulta del Presupuesto Participativo 2025⁷.

¹ Colaboró: Enrique Ramírez López.

² En adelante: *parte actora*

³ En adelante: *Unidad Territorial*

⁴ En adelante: *proyecto ganador*

⁵ En adelante todas las fechas corresponden a 2025, salvo precisión en contrario.

⁶ En adelante: *Instituto Electoral*.

⁷ Mediante el acuerdo **IECM/ACU-CG-006/2025**.

- 2. **2. Registro de proyectos.** Del 7 de febrero al 1 de mayo, se llevó a cabo el registro de los proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.
- 3. **3. Dictaminación.** Del 24 de marzo al 18 de junio, el Órgano Dictaminador de la alcaldía Iztapalapa llevó a cabo la dictaminación de los proyectos, determinando su viabilidad o inviabilidad, según cada caso. Las publicaciones de las dictaminaciones se realizaron el 20 de junio.
- 4. **4. Aclaración.** Del 23 al 27 de junio la personas promoventes de proyectos dictaminados como no viables presentaron escrito de aclaración.
- 5. **5. Redictaminación.** Del 30 de junio al 2 de julio, los Órganos Dictaminadores llevaron a cabo la redictaminación de los proyectos, determinando la viabilidad, o bien, de nueva cuenta, la inviabilidad. Su publicación ocurrió el tres de julio siguiente.
- 6. **6. Jornada consultiva.** Del 4 al 14 de agosto (en modalidad digital), y el 17 de agosto (de forma presencial), se desarrolló la Jornada de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.
- 7. **7. Cómputo de resultados.** Del 17 al 19 de agosto, las Direcciones Distritales del *Instituto Electoral* realizaron la validación de resultados de la Consulta.
- 8. Con relación a la jornada desarrollada en la *Unidad Territorial*, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Votación Total
1	Arco de los Culhuacanes	0
2	Juegos infantiles en Plaza Cuautémoc	23
3	Pozo de retención de agua pluvial en la calle E. Esq. con av. Tláhuac	126



4	Instalación de una cancha de fútbol rápido y colocación de equipos y aparatos de gimnasio al interior del centro comunitario Culhuacán y pintura	9
5	Culhuacán sin baches	21
6	Rehabilitación y remodelación de la multicancha del parque Jorge Pullman (Castores)	1
OPINIONES NULAS		4
TOTAL		184

9. **8. Acta de validación de resultados.** El 17 de agosto, la Dirección Distrital 28⁸ del *Instituto Electoral* emitió la constancia de validación de resultados en la *Unidad Territorial*.
10. **9. Demanda.** El 19 de agosto, la *parte actora* presentó ante la *Dirección Distrital* escrito de demanda en el que controvierte la legalidad del proyecto ganador denominado Pozo de retención de agua pluvial en la calle E. Esq. con av. Tláhuac, porque considera que replica obligaciones legales y administrativas de la alcaldía.
11. **10. Remisión.** El 22 de agosto, la *Dirección Distrital* remitió a este *Tribunal Electoral* la demanda interpuesta por la *parte actora*, el informe circunstanciado, las constancias de trámite que acreditan la publicitación del presente medio de impugnación, así como diversa documentación relacionada con el acto controvertido.
12. **11. Integración y turno.** El 22 de agosto, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente **TECDMX-JEL-285/2025** y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo para la sustanciación correspondiente.
13. **12. Radicación.** El 26 de agosto, la Magistrada Instructora radicó el expediente en su Ponencia para su sustanciación.

⁸ En adelante: *Dirección Distrital*.

14. **13. Admisión y cierre de instrucción.** En su momento, se admitió la demanda y se decretó el cierre de instrucción, por lo que se procedió a la elaboración de la sentencia conforme a las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

15. Este *Tribunal Electoral* es competente⁹ para conocer y resolver el presente Juicio Electoral, ya que la controversia está relacionada con el desarrollo de un instrumento de democracia participativa¹⁰, en el cual se impugna la legalidad del proyecto ganador denominado Pozo de retención de agua pluvial en la calle E. Esq. con av. Tláhuac, de la unidad territorial Culhuacán (Pblo), Iztapalapa.

SEGUNDA. Procedencia

16. El medio de impugnación cumple los requisitos de procedibilidad¹¹, como se explica a continuación:
17. **1. Forma.** La demanda **i)** se presentó por escrito ante la autoridad responsable; **ii)** consta el nombre de la *parte actora*, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones; **iii)** se identifica el acto reclamado; **iv)** los hechos en que basa su

⁹ Con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c), numeral 5° y I), 122, apartado A, bases VII y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (**Constitución Federal**); 26, apartado B, 38 y 46, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México (**Constitución Local**); 30, 165, párrafos primero y segundo, fracción V, 171, 178 y 179, fracciones II, III, y VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (**Código Electoral**); 3, 7, fracción II, apartados II y VI, 14, fracción V, 15, 17 y 26 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (**Ley de Participación**); y 31, 37, fracción I, 102, 103, fracciones I, III y VI de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (**Ley Procesal**).

¹⁰ De conformidad con el artículo 28, primer párrafo, fracción II de la *Ley Procesal*.

¹¹ Previstos en el artículo 47 de la *Ley Procesal*.

impugnación, los agravios que le generan perjuicio y los preceptos legales presuntamente violentados; y, además, **v)** se advierte la firma autógrafa de la *parte actora*.

18. **2. Oportunidad.** El juicio se promovió oportunamente, ya que la *parte actora* controvierte los resultados de la jornada consultiva, cuya constancia de validación se emitió el **17 de agosto**, por lo que, si la demanda se presentó el **19 siguiente**, resulta evidente que está dentro del plazo de 4 días previsto en la *Ley Procesal*¹².
19. **3. Legitimación.** El juicio electoral es promovido por parte legítima,¹³ al tratarse de una ciudadana, que habita en la *Unidad Territorial*.
20. **4. Interés.** La promovente cuenta con **interés legítimo** para controvertir la viabilidad del proyecto ganador en el ejercicio participativo, porque es habitante de la Unidad Territorial Culhuacán (Pblo) en la alcaldía Iztapalapa, según se advierte de la credencial para votar con fotografía que adjuntó a su demanda.
21. Como lo aduce en su demanda, la promovente acude y funda su interés en su calidad de ciudadana y habitante de la Unidad Territorial Culhuacán, (Pblo), al considerar que el proyecto ganador no cuenta con la viabilidad correspondiente, lo que estima que afecta su derecho al ejercicio del presupuesto participativo y de los vecinos de esa comunidad.
22. Ahora bien, la Sala Superior ha entendido¹⁴ el interés legítimo como el reflejo del mandato constitucional de potencializar el acceso a la justicia e implica un análisis caso por caso para

¹² De conformidad con el artículo 42 de la *Ley Procesal*.

¹³ De conformidad con lo previsto por los artículos 46 fracción IV y 103 fracción III, de la *Ley Procesal*.

¹⁴ Al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-97/2015.

desarrollarse de conformidad con los cambiantes contextos jurídicos, en aras de proteger en mayor medida los derechos sustantivos de la ciudadanía y los principios constitucionales.

23. De manera que, el **interés legítimo** no exige un derecho subjetivo expresamente tutelado para poder ejercer una acción, sino que, para ejercerlo, basta un vínculo entre la parte actora y un derecho humano, del cual derive una afectación a su esfera jurídica, dada una especial situación frente al orden jurídico.
24. Este interés se asocia a la tutela jurídica que corresponda a la especial situación frente al orden jurídico, de tal suerte que alguna norma puede establecer un interés difuso en beneficio de una colectividad o grupo al que pertenezca la persona agraviada.
25. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que¹⁵ para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que:
 - a) Exista una norma constitucional que establezca o tutele algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una colectividad;
 - b) El acto reclamado transgreda ese interés legítimo, por la situación que guarda la persona accionante frente al ordenamiento jurídico -ya sea de manera individual o colectiva-;
 - c) La persona promovente pertenezca a esa colectividad.
26. También debe considerarse que los elementos constitutivos del interés legítimo son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de

¹⁵ Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.

27. En el caso, el promovente en su calidad de habitante de la Unidad Territorial Culhuacán (Pblo) se ubica en una circunstancia particular que le permite aducir una posible afectación colectiva, cierta y actual respecto a su derecho de democracia participativa, reconocido por el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de México, reflejado en cuestionar la viabilidad del proyecto ganador de la consulta de presupuesto participativo.
28. Al respecto, conviene señalar que, en su oportunidad, este órgano jurisdiccional determinó¹⁶ que las personas habitantes de la respectiva Unidad Territorial contarían con **interés legítimo** para impugnar la dictaminación, una vez celebrada la jornada consultiva, en el supuesto en que el proyecto controvertido resultara ganador.
29. Ello, porque al tratarse del proyecto ganador, su ejecución sería inminente, por lo que las personas habitantes de la Unidad Territorial estarían en aptitud de controvertir la viabilidad de la propuesta, bajo una posible afectación a sus derechos de presupuesto participativo.
30. El criterio descrito es congruente con lo razonado por la Sala Regional Ciudad de México,¹⁷ en cuanto a que las personas residentes de una Unidad Territorial cuentan con interés legítimo para reclamar los resultados que declaren ganadores a los proyectos sometidos a opinión en la jornada consultiva.

¹⁶ Por ejemplo, al resolver el TECMDX-JEL-256/2025 en sesión de 24 de julio de 2025.

¹⁷ Al resolver los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-64/2020 y SCM-JDC-66/2020.

31. Una conclusión distinta implicaría **dejar en estado de indefensión** a la ciudadanía que busca cuestionar la viabilidad del proyecto ganador que presuntamente se ejecutará en la Unidad Territorial en la que habita; dado que, previo a la jornada consultiva, no contaba con interés para presentar la impugnación atinente, por lo que debe admitirse la posibilidad de acudir a la instancia jurisdiccional una vez celebrado el ejercicio consultivo, a fin de garantizar el derecho de acceso a un recurso efectivo.
32. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que recientemente la Sala Regional Ciudad de México¹⁸ distinguió que el derecho a impugnar los dictámenes de los proyectos del presupuesto participativo corresponde, entre otros, a aquellas personas que hubieran registrado algún proyecto viable y que combatían la determinación de viabilidad de otro proyecto, en virtud de que podría competir con el suyo.
33. Sin embargo, debe señalarse que la citada sentencia se emitió una vez iniciada la jornada consultiva (esto es, ya había concluido la etapa de dictaminación), por lo que considerar que únicamente las personas ciudadanas que propongan un proyecto pudieran impugnar la viabilidad de otro proyecto, podría vulnerar el derecho a impartición de justicia de las personas ciudadanas.
34. De ahí que, este órgano jurisdiccional considera que la promovente cuenta con interés legítimo para promover el juicio.
35. **5. Definitividad.** No se advierte que exista un medio de impugnación que previamente deba agotarse para controvertir

¹⁸ Al resolver los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-237/2025 y SCM-JDC-240/2025 en sesión de 14 de agosto de 2025.

los resultados de la consulta sobre el presupuesto participativo, de ahí que se tenga por satisfecho este requisito.

36. **6. Reparabilidad.** Se cumple porque el acto controvertido es susceptible de ser modificado, revocado o anulado a través del fallo que emita este Tribunal Electoral.

TERCERA. Cuestión previa

37. Este Tribunal Electoral considera que **es posible cuestionar la viabilidad del proyecto ganador, una vez celebrada la jornada consultativa** del presupuesto participativo, con base en las razones que se exponen a continuación.
38. En principio, las impugnaciones presentadas para controvertir los resultados de la consulta se vinculan directamente con la existencia de supuestas irregularidades, acontecidas durante el desarrollo de la jornada en que la ciudadanía emitió su opinión.
39. Al efecto, el artículo 135, de la Ley de Participación Ciudadana establece un catálogo de causales para determinar la nulidad de la consulta sobre presupuesto participativo, relacionadas esencialmente con actos surgidos en el desarrollo de la jornada, tales como recibir la opinión en lugar o fecha distintos a los autorizados, impedir la emisión de la opinión, realizar proselitismo durante la emisión de la opinión, expulsar a funcionarios electorales, ejercer violencia, irregularidades graves, compra o coacción de la opinión, entre otras.
40. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, la revisión de los ejercicios de participación ciudadana no puede limitarse a la existencia de presuntas irregularidades en la jornada electiva, sino que **debe velar por los principios de certeza y seguridad**

jurídica que protegen los derechos de la colectividad y la integridad del proceso de la consulta ciudadana.

41. Al respecto, la normativa constitucional y legal¹⁹ dispone que este Tribunal Electoral es competente para resolver los medios de impugnación en materia de participación ciudadana, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de esos procesos, cuando se consideren vulnerados los derechos político-electorales de las personas, así como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades de participación ciudadana se ajusten a la Constitución Local, el Código Electoral y la Ley Procesal.
42. Por su parte, la Ley Procesal²⁰ establece que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones de las autoridades locales,²¹ para salvaguardar los resultados vinculantes de los procesos democráticos, así como la salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
43. Con base en ello, la normativa descrita **obliga a este órgano jurisdiccional a analizar los medios de impugnación dirigidos a controvertir la viabilidad del proyecto ganador**, a efecto de evitar que su posterior imposibilidad de realización se traduzca en la vulneración de derechos de la colectividad consultada y del propio uso del presupuesto participativo, con base en lo que se razona enseguida.

¹⁹ Artículos 38, párrafo 4 de la Constitución local y artículo 179, párrafo primero, fracciones II, III, IV y VII, el Código Electoral, ambos de la Ciudad de México.

²⁰ Artículo 28, párrafos primero, fracciones II y IV, y último.

²¹ Resulta orientador el criterio contenido en la tesis XLIX/2016, emitida por la Sala Superior, de rubro "MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISEÑO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR"

44. *Naturaleza del presupuesto participativo.* En primer término, la revisión de la viabilidad del proyecto ganador se vincula directamente con la protección de los derechos de las personas habitantes de la Unidad Territorial.
45. La esencia del presupuesto participativo consiste en que las personas habitantes ejercen su derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para optimizar su entorno, a través de proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbano y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.²²
46. Asimismo, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en la resolución de problemas y temas de interés general, así como en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por medio de los mecanismos de democracia participativa admitidos en el marco constitucional.²³
47. De manera que, la **naturaleza del presupuesto participativo conlleva el involucramiento de la ciudadanía**, ya que las personas habitantes tienen derecho a proponer, elegir y vigilar los proyectos que se ejecutarán en la Unidad Territorial, pues se trata de una prerrogativa de carácter colectivo que lejos de tutelar intereses individuales o particulares, se dirige a la adopción de acciones para un beneficio común.
48. Adicionalmente, debe decirse que el involucramiento de la ciudadanía se da con la presentación de inconformidades o

²² Artículos 7, 116 y 120 de la Ley de Participación, en relación con el 26, apartado B, de la Constitución Local y el 365 fracción I, del Código Electoral, todos de la Ciudad de México.

²³ Artículo 25, apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución de la Ciudad de México.

impugnaciones que busquen cuestionar las propuestas y el ejercicio del presupuesto asignado.

49. Por ello, la convocatoria inicial se encuentra dirigida a todas las personas habitantes, vecinas y ciudadanía, además de las organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran los órganos de representación ciudadana de la Ciudad de México para provocar su participación y que tengan conocimiento de las diversas etapas de la consulta en que pueden participar.
50. Por tanto, en la etapa de validación de resultados, deben analizarse posibles irregularidades o cuestionamientos que pudieran tener un impacto en los derechos de la colectividad en torno al ejercicio del presupuesto participativo.
51. *Vigilar la ejecución del proyecto.* Por otra parte, la revisión de la viabilidad del proyecto ganador encuentra justificación en la necesidad de garantizar que los recursos asignados puedan ser efectivamente ejercidos en una mejora al entorno de esa demarcación.
52. Como se indicó, el presupuesto participativo se enmarca en un interés colectivo, pues la ciudadanía está interesada en que **los fines del presupuesto participativo no se distorsionen y cumplan los objetivos que tiene encomendados.**
53. De modo que, en esta etapa de resultados, los proyectos ganadores pueden desde la perspectiva de su viabilidad, ya que, de manera posterior a la jornada consultiva, existe la posibilidad de que se presenten o conozcan aspectos no considerados en el dictamen del proyecto ganador que, en forma excepcional, puedan poner en riesgo o incluso generen una imposibilidad para llevar a cabo dicho proyecto.

54. Resulta necesario entonces analizar las circunstancias fácticas que pudieran impedir o ponga en riesgo la materialización del proyecto ganador, en aras de garantizar los derechos de la colectividad consultada y el efectivo ejercicio de los recursos.
55. En el caso concreto, debe tenerse en consideración además que la viabilidad del proyecto ganador **no fue revisada previamente en la instancia jurisdiccional**, al no ser impugnada, por lo que con la presente sentencia se verifica por primera ocasión si es factible la implementación del proyecto ganador en la Unidad Territorial Culhuacán (Pblo).
56. Incluso, debe recordarse que, en su oportunidad, este órgano jurisdiccional determinó que las personas habitantes de la respectiva Unidad Territorial contarían con interés legítimo para impugnar la dictaminación, una vez celebrada la jornada consultiva, en el supuesto en que el proyecto controvertido resultara ganador.
57. Por otra parte, la admisión de la impugnación sobre la viabilidad del proyecto ganador **no trastoca lo determinado en las etapas previas del ejercicio democrático, ni afecta el principio de definitividad**, sino que es congruente con la necesidad de otorgar certeza en cuanto a que el presupuesto participativo pueda verse ejercido en favor de las personas habitantes de la unidad territorial.
58. Desde luego que el escenario deseado, sería que la viabilidad de todos los proyectos se verificara de manera previa a la jornada consultiva y que así la ciudadanía estuviera en condiciones de emitir su opinión con la certeza que la viabilidad ha sido revisada, sin embargo debe recordarse que **las vulneraciones alegadas**

en materia de presupuesto participativo son reparables, ya que no se trata de una elección constitucional, por lo que de asistirle la razón la parte promovente se podría ordenar la reposición de la consulta respectiva.²⁴

59. En consecuencia, este Tribunal Electoral considera que en esta etapa de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo es posible analizar la viabilidad del proyecto ganador, en atención a los planteamientos de la parte actora.

CUARTA. Estudio de fondo

1. Planteamiento de la *parte actora* y agravios

60. La *parte actora* pretende que este órgano jurisdiccional **determine la ilegalidad del *proyecto ganador*** y, como consecuencia ordene la reasignación de los recursos a otro proyecto que cumpla los criterios establecidos en la ley.
61. Para ello, expone como único **agravio** que el ***proyecto ganador es ilegal*** en razón que replica obligaciones legales y administrativas de la alcaldía.

2. Problemática por resolver y metodología de análisis

62. Como se ha referido, en el presente juicio electoral se debe resolver si el *proyecto ganador* es ilegal, en razón que replica obligaciones legales y administrativas de la alcaldía
63. Por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional determinar si existe alguna restricción para que se implemente un proyecto de presupuesto participativo, cuando este

²⁴ Criterio sostenido por este Tribunal Electoral al resolver el juicio electoral TECDMX-JEL-310/2025, así como por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-109/2023.

replique alguna actividad o servicio a la que estén obligadas las alcaldías.

64. Para el estudio del presente asunto, se señalará el marco normativo atinente, las pruebas que obran en el expediente; y, finalmente, se analizará en el caso concreto si el planteamiento de la parte actora es suficiente para alcanzar su pretensión²⁵.

3. Decisión

65. Los agravios formulados por la parte actora resultan infundados y por tanto se determina la legalidad del proyecto ganador.

4. Justificación

a) Marco Normativo.

66. El presupuesto participativo²⁶ es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos económicos que otorga el Gobierno de la Ciudad.
67. Esto, con la finalidad de que sus habitantes optimicen su entorno, al proponer obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.
68. Por su parte, el presupuesto participativo deberá estar orientado, esencialmente, al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.

²⁵ Jurisprudencia 4/2000 de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

²⁶ Artículos 116 y 117 de la Ley de Participación.

69. Ahora bien, el Órgano Dictaminador tiene la obligación de evaluar el cumplimiento de los requisitos de los proyectos propuestos, para lo cual debe contemplar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto social y beneficio comunitario y público.²⁷
70. Lo anterior, conforme al calendario que establezca cada Órgano Dictaminador y, una vez dictaminados, deberán ser remitidos al Instituto Local.
71. Dichas determinaciones, si se emitieran en sentido negativo, podrían ser controvertidas mediante presentación de escrito de aclaración y, posteriormente, las re-dictaminaciones en atención a tales escritos, mediante medio de impugnación interpuesto ante este órgano jurisdiccional.²⁸
72. Para ello, los Órganos Dictaminadores tienen la obligación de realizar un estudio de viabilidad y factibilidad de los proyectos de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda.
73. Derivado de lo anterior, deben emitir un dictamen debidamente fundado y motivado²⁹ en el que se expresen clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público,³⁰ así como las razones por las cuales se dictaminó negativa o positivamente el proyecto.³¹

²⁷ De conformidad con el artículo 120, inciso d) de la Ley de Participación.

²⁸ De conformidad con la base novena, punto 7, incisos a) y b) de la Convocatoria.

²⁹ Artículos 14 y 16 de la Constitución general.

³⁰ En concordancia con el artículo 126 de la Ley de Participación.

³¹ De conformidad con el artículo 127 de la Ley de Participación.

74. Aun cuando la Ley de Participación no define en qué consisten las cuestiones técnica, jurídica, ambiental y financiera, dispone algunos parámetros que los Órganos Dictaminadores deben verificar con la finalidad de determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos, tales como:

- Realizar un estudio de viabilidad y factibilidad de los proyectos de acuerdo con las necesidades y problemas a resolver.
- Fijar el costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que se desprenda del proyecto, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
- Verificar que los proyectos no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimonio cultural, lo anterior de conformidad con la normativa en materia de Ordenamiento Territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los Programas Parciales, y demás legislación aplicable.

75. A su vez, la Ley de Participación³² dispone que el dictamen debe contener elementos como el nombre del proyecto, la Unidad Territorial donde se presentó, elementos considerados para dictaminar, monto total de costo estimado, razones por las cuáles se dictaminó negativa o positivamente el proyecto, así como integrantes del Órgano Dictaminador.

³² Artículo 127 de la Ley de Participación.

76. En suma, la debida fundamentación y motivación de la validación de un proyecto, ya sea para dictaminarlo de manera favorable o desfavorable, debe incluir:
- De manera general, la expresión clara y puntual de la viabilidad: técnica, jurídica, ambiental, financiera, así como el beneficio comunitario y público que implicará el proyecto.
 - Dentro de tales aspectos deberá razonarse, al menos, lo siguiente:
 - Las necesidades y problemas a resolver.
 - Establecer el costo (que deberá incluir los indirectos).
 - Tiempo de ejecución y posible afectación temporal en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
 - La no afectación de suelos de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental.

b) Pruebas

77. Previo al análisis del caso concreto, es importante destacar que obran en los autos del expediente las siguientes **pruebas**:

i. Documentales públicas³³:

- Acta de jornada y escrutinio y cómputo para la consulta de presupuesto participativo 2025, correspondiente a la

³³ Con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 55 y 61 de la *Ley Procesal*, al ser expedidas por personas funcionarias electorales, dentro del ámbito de su competencia y no estar controvertidas.

unidad territorial Culhuacán (Pblo) de la alcaldía Iztapalapa.

- Acta de incidentes de la consulta de presupuesto participativo 2025 de la unidad territorial Culhuacán (Pblo) de la alcaldía Iztapalapa.
- Acta de validación de resultados para la consulta de presupuesto participativo 2025, de la unidad territorial Culhuacán (Pblo) de la alcaldía Iztapalapa.
- Acta circunstanciada de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo de la unidad territorial Culhuacán (Pblo) de la alcaldía Iztapalapa.

c) Caso concreto.

78. Como se señaló, la *parte actora* aduce en su escrito de demanda que el *proyecto ganador* es ilegal, en razón que replica obligaciones legales y administrativas de la alcaldía Iztapalapa.
79. Al respecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia **favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.**
80. Asimismo, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad.**

81. De ahí que las autoridades jurisdiccionales que interpreten y apliquen las normas jurídicas deben hacerlo observando la protección más amplia para los justiciables.
82. Al respecto, la *Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México* establece que el presupuesto participativo es un instrumento de democracia participativa,³⁴ mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, **proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales**³⁵.
83. Asimismo, establece que los recursos del presupuesto participativo serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio, los cuales se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras, servicios, así como actividades recreativas, deportivas y culturales³⁶.
84. Por otro lado, prevé que el presupuesto participativo deberá estar orientado, esencialmente, al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.

³⁴ De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

³⁵ De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

³⁶ Artículo 117.

85. De esa manera, dicha ley establece el proceso a través del cual se llevará este ejercicio de participación ciudadana, en el que se contemplan las siguientes etapas: emisión de la convocatoria, asamblea de diagnóstico y deliberación, registro de proyectos, validación técnica de los proyectos, día de la consulta, asamblea de información y selección, ejecución de proyectos y las asambleas de evaluación y rendición de cuentas.
86. De lo anterior, se sigue que para que un proyecto de presupuesto participativo pueda ser votado por la ciudadanía, requiere una validación técnica, misma que se realiza a través de un órgano dictaminador – creado por cada alcaldía- encargado de evaluar la factibilidad de cada proyecto, en el aspecto técnico, jurídico, ambiental, financiero, así como el impacto de beneficio comunitario y público.
87. De ese modo las personas integrantes del órgano dictaminador están obligados a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo a las necesidades o problemas a resolver, su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno de las Alcaldías y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
88. Asimismo, el órgano dictaminador verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural, áreas declaradas como patrimonio cultural.

89. De lo anterior, se advierte que la ciudadanía tiene el derecho a decidir el proyecto en el cual considera que se debe gastar un porcentaje del presupuesto público, para lo cual, primero es necesario que se registre el proyecto y que el órgano dictaminador, a través de un dictamen, determine su viabilidad.
90. Para emitir el dictamen correspondiente, el órgano dictaminador debe analizar las necesidades, problemas a resolver, costos, tiempo de ejecución y posible afectación temporal y verificar que no afecten los suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural o áreas declaradas como patrimonio cultural.
91. Como se advierte, las restricciones para que puedan ser viables los proyectos sobre presupuesto participativo consisten en que el proyecto no cumpla el aspecto técnico, jurídico, ambiental, financiero, así como el impacto de beneficio comunitario y público, que no afecten las áreas antes señaladas, o bien, que no resuelvan necesidades o problemáticas de la comunidad en la que se vayan a implementar, para lo cual, el órgano dictaminador determinará la inviabilidad de los mismos.
92. En consecuencia, del análisis de las normas citadas, se advierte que existe una prohibición para que las erogaciones destinadas al presupuesto participativo **suplan o subsanen las obligaciones que las alcaldías** como actividad sustantiva deban realizar.
93. Sin embargo, esta prohibición se debe interpretar de manera sistemática con el resto de los preceptos legales señalados, a fin de que sea posible lograr los objetivos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

94. Lo anterior, es así ya que la legislación señala que el presupuesto participativo es un mecanismo para que las personas optimicen su entorno, proponiendo proyectos **de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.**
95. Si bien, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que los recursos correspondientes del presupuesto participativo serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía, esto se debe interpretar en el sentido de que los recursos del presupuesto participativo no son los mismos que los asignados a las dependencias o alcaldías para cumplir con sus acciones de gobierno y programas específicos.
96. Refuerza lo anterior, el hecho que el artículo 117 de la referida Ley establece que los recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales, obligaciones que de manera genérica les corresponden a las alcaldías de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
97. Pues si se interpretara que están restringidos los proyectos cuyas acciones también sean competencia de las dependencias o alcaldías, la totalidad de los proyectos se consideraría inviable, y contravendría el destino de los recursos asignados al presupuesto participativo, con lo que conlleva incluir una restricción que no está prevista en la ley.

98. Aunado a que, en el caso en concreto, el órgano dictaminador de la alcaldía Iztapalapa después de analizar el *proyecto ganador*, determinó que era viable, por lo que, se presume que se verificó que cumplió con los parámetros legales, máxime que no se encuentra contemplado en alguna de las atribuciones exclusivas de las alcaldías establecidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México o de alguna dependencia la ejecución de proyectos de captación de aguas pluviales como es el caso.
99. Al respecto, de conformidad con el artículo 31 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en relación con el artículo 15, fracción II Bis, 16, fracción XXVI, 20, 29 y 30 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México le corresponde a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, entre otras facultades, las siguientes:
- Coordinarse con la Federación, en el diseño y ejecución de los planes y programas para el abastecimiento de aguas, tratamiento, servicios de drenaje y alcantarillado, así como la captación y uso eficiente de aguas pluviales; en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable, así como, construir las instalaciones para aprovechar las aguas pluviales.
 - Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable.
 - Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y operación de sistemas de tratamiento de

aguas residuales, su reúso, y aprovechamiento de aguas pluviales, así como la restauración y protección de los mantos freáticos.

- La definición de políticas para la administración y la gestión integral de los recursos hídricos, considerando las disposiciones contenidas en esta Ley, en materia de planeación, estudio, proyección, mantenimiento, rehabilitación, construcción, operación y ampliación de obras de abastecimiento de agua potable, pluvial, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su reúso, destinadas al consumo, uso humano con fines domésticos, urbano, comercial, industrial o de cualquier otro uso en el Distrito Federal.
- Establecer mecanismos necesarios para el tratamiento de aguas residuales, su reúso y la recuperación de aguas pluviales en el Distrito Federal.
- Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, el Sistema de Aguas y las delegaciones incluirán campañas periódicas para fomentar la mitigación del uso inadecuado del agua y los recursos naturales relacionados con ésta, así como anunciar por diversos medios posibles mensajes básicos para el buen manejo del agua, su higiene y saneamiento, **las formas de colectar aguas pluviales domésticas para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional como el científico y tecnológico.**
- Promover en las zonas urbanas y rurales, la captación, almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como

recurso alternativo, desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso. Las aguas pluviales que recolecten los particulares y sean sometidas a procesos de tratamiento o potabilización y que cumplan con las disposiciones de las normas oficiales mexicanas y previa certificación de calidad de la autoridad competente podrán comercializarse atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable.

100. Por otra parte, el artículo 125 Bis de la Ley de Aguas del Distrito Federal, establece que:
101. En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios localizados en las Zonas I y II de lomas o de transición en el Distrito Federal, conforme a la zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, será obligatorio contar con **sistemas de cosecha y recarga de aguas pluviales al subsuelo que permitan su infiltración.**
102. Dicha infiltración deberá encausarse a través de diferentes sistemas, como zanjas y pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o de cualquier material que permita la infiltración del agua de lluvia y la recarga al subsuelo.
103. Las medidas y demás especificaciones de las zanjas de absorción serán determinadas en el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal.
104. De lo anterior, se estima que las actividades relacionadas con la recolección de aguas pluviales no son exclusivas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua o de las alcaldías, puesto que pueden participar diversas personas en dicha actividad, siempre que se cumplan los requisitos legales, tal como lo consideró el

órgano dictaminador de la alcaldía Iztapalapa, en el dictamen de viabilidad del *proyecto ganador*, en los aspectos técnico y ambiental.

105. Por lo que en su momento corresponderá a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, a través de la Red de Contralorías Ciudadanas, vigilar y supervisar que el *proyecto ganador*³⁷ cumpla la normativa aplicable en su ejecución.
106. Lo expuesto, conlleva a determinar que el proyecto que se sometió a la consulta ciudadana se ajusta a la normatividad aplicable.
107. Finalmente, respecto a la manifestación de la parte actora en relación a que no se le permitió el acceso al cómputo de los votos, dicha afirmación es genérica y carece de sustento probatorio, pues contrario a lo manifestado de las constancias que integran el presente expediente en que se actúa, se cuenta con el Acta de incidentes de la consulta de presupuesto participativo 205, en la que se asentó la leyenda "*No hubo incidentes*", por lo que dicho argumento resulta inoperante.
108. De ahí que, al desestimarse los motivos de agravio expuestos por el promovente y resultar viable el proyecto ganador, en consecuencia, se confirman los resultados de la consulta de presupuesto participativo 2025, en la Unidad Territorial Culhuacán (Pblo), Iztapalapa.

d. Vinculación al Instituto Electoral de la Ciudad de México

109. Con independencia de lo anterior, este Tribunal Electoral considera necesario vincular al Instituto Electoral para que en los

³⁷ De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

próximos ejercicios de presupuesto participativo contemple, dentro de la emisión de las convocatorias respectivas, una etapa de capacitación a las personas integrantes de los Órganos Dictaminadores de las distintas Alcaldías de esta ciudad.

110. Lo anterior tomando en consideración que, conformidad con el artículo 126 de la Ley de Participación, los Órganos Dictaminadores se constituyen cada año por distintas personas, entre ellas, “cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con los proyectos a dictaminar, provenientes de instituciones académicas, que serán propuestos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México”.
111. En el mismo artículo se establece que el Instituto Electoral realizará el procedimiento para seleccionar a las personas especialistas mediante insaculación.
112. En este tenor, es importante que el Instituto Electoral contemple en el calendario de actividades del ejercicio de presupuesto participativo, una etapa en la que se capacite a las personas especialistas, al personal de la Alcaldía y de las Direcciones Distritales para que realicen debidamente el estudio de viabilidad y factibilidad de los proyectos que en su caso, sean sometidos a consulta, así como orientarles debidamente en el llenado de los dictámenes respectivos.
113. Enfatizando que para la dictaminación respectiva deben analizarse las necesidades de la comunidad, costos, tiempo de ejecución y posible afectación temporal de la implementación de los proyectos en revisión, así como verificar que no afecten los suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural o áreas declaradas como patrimonio cultural. Para ello, deberá

capacitarse a las personas integrantes de los Órganos dictaminadores para que analicen los aspectos: técnico, jurídico, ambiental, financiero, así como el impacto de beneficio comunitario y público, debiendo particularizar cada caso.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚNICO. Se **confirma**, en lo que fue materia de la impugnación, la Consulta de Presupuesto Participativo, en la Unidad Territorial Culhuacán (Pblo), demarcación Iztapalapa, conforme a las razones expuestas en la parte Considerativa de esta Sentencia.

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.

PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tecdmx.org.mx), una vez que esta sentencia haya causado estado.

Hecho lo anterior, en su caso, **devuélvase** los documentos atinentes, y en su oportunidad, **archívese** el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, las Magistraturas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ante la Secretaria General, quien autoriza y da fe.

ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
MAGISTRADO

LAURA PATRICIA JIMÉNEZ
CASTILLO
MAGISTRADA

KARINA SALGADO
LUNAR
MAGISTRADA

OSIRIS VÁZQUEZ
RANGEL
MAGISTRADO

LUCÍA HERNÁNDEZ CHAMORRO
SECRETARIA GENERAL